

Autopsia de la prohibición de
***pruebas
nucleares***

Peter Trubowitz

En octubre de 1999, el Senado de Estados Unidos rechazó el Tratado sobre la Prohibición Total de Pruebas Nucleares con una votación de 48 votos en contra y 51 a favor, muy por debajo de la mayoría de dos tercios necesaria para ratificarlo. La resolución del Senado, que puede compararse con el repudio de Estados Unidos al Tratado de Versalles, provocó ira y exasperación en los medios internacionales, pues en él se habían invertido incontables horas de negociaciones a lo largo de decenas de años y había sido firmado por más de 150 países.

Como consecuencia de esto, el gobierno de Clinton ha sido ásperamente criticado por ineptitud y falta de preparación. En la manera como la Casa Blanca manejó el asunto, muchos ven una prueba más de que al Presidente le preocupan más las cuestiones nacionales que las internacionales. Existe sin embargo, el peligro de que en estas discusiones acerca de a quién corresponde la culpa, se pierda el significado real del rechazo del Senado. En contra de lo que muchos podrían pensar, la derrota de la Casa Blanca no es algo que se pueda componer fácilmente recurriendo a una mejor táctica y planeación. Ni siquiera la solución se encuentra con el próximo presidente.

En la actualidad la política exterior de Estados Unidos es demasiado partidista como para que pueda ser reparada con facilidad. Cuando se trata de asuntos que van de sofocar los conflictos étnicos en los Balcanes a extender el libre comercio en el hemisferio occidental, pasando por la condonación de la deuda externa de las empobrecidas naciones del África negra, los dos partidos del país están siempre en desacuerdo. La batalla sobre la prohibición de las pruebas

nucleares es la última escaramuza en esa guerra entre republicanos y demócratas, una prueba de lo mal que están las cosas realmente. ¿Quién hubiera pensado que los republicanos llegarían a unirse para derrotar un tratado por el que aboga más del 80 por ciento de los estadounidenses?

Durante una gran parte de la guerra fría, republicanos y demócratas, tuvieron mucho cuidado de no politiquear con la política exterior, al menos no abiertamente. Desde luego, hubo excepciones, entre las cuales hay algunas muy evidentes, como el “cebo comunista” de Harry Truman para ganar las elecciones de 1948, la promesa de Dwight Eisenhower de “ir a Corea” si lo elegían y la lógica de John Kennedy sobre la “brecha de los misiles” para justificar la escalada militar; pero, en la mayoría de las cuestiones de política exterior, la política partidista se detenía al borde del agua. Asumir una actitud bipartidista significaba la derrota del presidente.

Por aquel entonces, la ansiedad del público respecto a los soviéticos y “la bomba” obligaba a los políticos a adoptar una posición centrista. El temor a ser etiquetado como “suave” o “débil” ante el comunismo, o como “temerario” y “beligerante” en cuestiones nucleares hacía que para los servidores públicos electos, en especial para aquellos que buscaban puestos de mayor importancia en el gobierno, fuese muy arriesgado desviarse demasiado hacia la izquierda o la derecha. Cuando los políticos ignoraban esas piedras de toque, como lo hicieron el republicano Barry Goldwater en 1964 y el demócrata George McGovern en 1972, lo pagaban caro en las elecciones.

Al desaparecer la amenaza soviética y al desvanecerse los temores públicos sobre las armas nucleares, los políticos se sienten menos restringidos. Tienen mayor libertad para pensar en asuntos exteriores como mismo piensan en cuestiones nacionales: como herramientas para establecer coaliciones, útiles en campañas electorales y para lograr el avance partidista. La ayuda extranjera, el gasto del Pentágono y el libre comercio, cuestiones que antaño parecían flotar sobre la política electoral como un globo suspendido, son ahora un tema de disputa legítimo.

Lo anterior ayuda a explicar por qué Bill Clinton ha tenido mucho mayores dificultades para lograr un apoyo bipartidista, que, por ejemplo, John Kennedy. Piénsese en lo siguiente: a principios de los años 1960, las mayorías repu-

blicanas y demócratas en el Senado apoyaron la política exterior de Kennedy más del 60 por ciento de las veces; en cambio, las coincidencias bipartidistas durante los primeros cuatro años de la administración Clinton fueron de apenas un 30 por ciento. Es necesario remontarse a los años 1920 para encontrar una época cuando la cooperación bipartidista era tan difícil de obtener.

Dicho lo anterior, el fin de la guerra fría no lo explica todo. Para empezar, la brecha entre los dos partidos con relación a la política exterior no se abrió con Clinton ni, en realidad, con George Bush. Los estudios sobre las votaciones del Senado y la Cámara de Representantes muestran que republicanos y demócratas han estado en desacuerdo sobre asuntos de política exterior desde los primeros años de Reagan. Y las cosas empeoraron en los años 1990, aunque la brecha comenzó a agrandarse mucho antes de la caída del muro de Berlín.

Por otra parte, el fin de la guerra fría tampoco explica por qué demócratas y republicanos mantienen puntos de vista tan diferentes. No basta con decir que se trata “sólo de política”. La interrogante es ¿por qué resulta tan ventajoso políticamente para los republicanos alinearse a favor de cuestiones como el gasto del Pentágono y la apertura de los mercados y por qué los demócratas son mucho más asustadizos en lo que respecta al libre comercio y más optimistas respecto a las instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial?

Las respuestas se encuentran en la composición regional de los dos partidos. Durante gran parte de la guerra fría, la política partidista trascendió las fronteras regionales: los “republicanos de Rockefeller” se alineaban con los demócratas sureños en cuestiones de política exterior, con lo que impedían la división partidista. Hoy día sin embargo, las cosas ya no son así: los rápidos avances electorales de los republicanos en el Oeste y el Sur, que culminaron con las elecciones intermedias que les permitió controlar el Congreso en 1994, los convirtieron en el partido de los estados del Sur y el Suroeste de EE.UU., la región conocida como el *sunbelt*. Los demócratas, por su parte, dominantes antaño en el Sur, se están convirtiendo rápidamente en el partido del Noreste de Estados Unidos, región esta conocida como el *rustbelt*.

No sería esto un problema si el *sunbelt* y el *rustbelt* tuviesen intereses similares sobre política exterior, pero no es así. Durante más de diez años, los políti-

cos de ambas regiones han combatido en el Congreso por lograr una mezcla adecuada de poder militar e inversión social. Lo que bajo Reagan comenzó como una lucha respecto a la política fiscal, se ha extendido hoy a otras esferas, entre ellas la política exterior. Los del *sunbelt* quieren más cañones; los del *rust-belt*, más mantequilla.

Y el porqué no oculta un gran misterio. Desde hace años, el Noreste ha estado perdiendo empleos, habitantes e ingresos en favor del Sur y el Oeste. En parte esto es debido a impuestos, la mano de obra y los precios de la energía, todo más alto en el Noreste. Así es la política federal. El coctel de gasto militar y mayor libertad de comercio que se dio durante la guerra fría y que Reagan supo mezclar a la perfección, benefició desproporcionadamente al Sur y al Oeste.

Ahora que la guerra fría terminó, muchos legisladores nortños buscan los medios para reducir los costos del liderazgo mundial estadounidense y aumentar la inversión pública en las ciudades del Norte, deprimidas y densamente pobladas. Los intentos demócratas por recortar drásticamente el presupuesto del Pentágono y limitar el acceso al mercado estadounidense deberían estudiarse bajo esa luz; al igual que el apoyo demócrata a la Organización de las Naciones Unidas en una labor pacifista, la expansión de la OTAN, al Banco Mundial para el alivio de la deuda y, más ampliamente, al multilateralismo. La idea es que la comunidad internacional debe asumir una proporción mayor de la carga que significa preservar la paz.

Por otro lado están los republicanos del *sunbelt*, que abogan por un gasto militar mayor. Ven el multilateralismo como anatema, no porque pudiese limitar la libertad de maniobra de Estados Unidos —tema recurrente de los ‘monolateralistas’—, sino porque podría significar un *establishment* militar más reducido. Desde ese punto de vista, armas y aliados son sustituibles: cuanto más se pueda confiar en otros tanto menos necesitamos depender de nosotros mismos. Y eso significa problemas para los muchos que dependen del complejo militarointustrial del *sunbelt*.

Lo cual nos lleva de vuelta al Tratado sobre la Prohibición Total de Pruebas. La votación en el Senado debe verse como lo que es: otro aldabonazo en la batalla entre los demócratas del *rustbelt* y los republicanos del *sunbelt* por

lograr el control de la política exterior. Tanto para los republicanos como para los demócratas, la prohibición de las pruebas nucleares se ha convertido en símbolo del compromiso del país con la seguridad colectiva y el multilateralismo. Su derrota representa una victoria simbólica para todos aquellos que tienen algún interés en una política exterior basada de principio a fin en el poder militar *estadounidense*.

¿Quién ganará? ¿Quién pagará? Las batallas de los partidos giran justamente en torno a esas preguntas. A los demócratas les preocupa que se truequen cañones por mantequilla y la manera cómo Estados Unidos puede adaptarse a las presiones de la competencia mundial. Los votantes republicanos son quienes mayor beneficio sacan del libre comercio y el gasto en defensa. La polarización del sistema bipartidista a lo largo de la línea divisoria entre el *sunbelt* y el *rustbelt* ha ahondado las divisiones y reducido significativamente el espacio político de maniobra. Hemos llegado al punto en que las coincidencias entre ambos partidos —lo que el Secretario de Estado de Truman, Dean Acheson, llamara alguna vez el “lubricante del gobierno nacional”— casi han desaparecido de la política del país. *i*

La democracia

se afirma en el Cono Sur

Sergio Berensztein

américa Latina nos tiene acostumbrados a las sorpresas y las ambigüedades. Las generalizaciones sobre el rumbo político, económico y social de los países de la región y de ella como un todo, siempre han resultado difíciles. La realidad latinoamericana ha sido, tradicionalmente, una especie de rompecabezas complejo y mutante. Es una tierra esta que reclama sutileza y flexibilidad analítica, más que simples visiones premoldeadas.

Los umbrales del nuevo siglo confirman esa trayectoria zigzagueante y generan una mezcla de desconcierto y fascinación: los países del Cono Sur parecen haberse aferrado a las prácticas democráticas, contradiciendo así su trayectoria reciente, los pronósticos y expectativas de muchos actores políticos relevantes y las lamentables experiencias de reversión autoritaria sufridas por otros países de la región. Entre finales de 1999 y comienzos del 2000, Argentina, Chile y Uruguay han llevado a cabo elecciones presidenciales de muchísima trascendencia para los respectivos procesos de consolidación democrática iniciados en la década de 1980. Pocos pensaban que, en un contexto de severísimas condiciones económicas internacionales y de transformaciones —y limitaciones— domésticas no menos importantes, estos países lograrían afirmar las reglas y procedimientos básicos de la democracia. En contraste, otros países del área sucumben al autoritarismo, la violencia, el manoseo de las instituciones y la profunda fragilidad —o franca inexistencia— del Estado de derecho. Así, Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay y Ecuador constituyen ejemplos muy evidentes de fracasos y/o reversiones de la democracia en América Latina.

¿Cómo explicar esta situación política tan particular que presenta la región? ¿Cuáles son los principales desafíos que, en términos de gobernabilidad democrática enfrentan estos países? Son estos sólo algunos de los muchos interrogantes claves que pueden formularse en torno a este proceso de regeneración democrática en el sur de América Latina. Es de esperar que de su análisis surjan elementos que sirvan también para comprender qué está ocurriendo en el resto de la región.

LA RESURRECCIÓN DEMOCRÁTICA Y SUS LÍMITES

A comienzos de la década de 1980, América Latina experimentó un proceso de democratización que coincidió con el estallido de la crisis económica más profunda y duradera de su historia contemporánea. En los países gobernados por regímenes autoritarios, esta crisis afectó severamente a las elites que se habían refugiado en los respectivos aparatos estatales o que eran parte constitutiva de ellos. Su ineptitud para manejar la crisis provocó en un fuerte desprestigio doméstico e internacional. La crisis fiscal del Estado se sumó así a las flagrantes violaciones de los derechos humanos, a otros ejemplos de fracaso en el manejo de asuntos públicos y a la resurrección de actores políticos y sociales no autoritarios como factores determinantes en el impulso del proceso de democratización. La única excepción fue Chile, donde la crisis económica sirvió para rearticular la coalición autoritaria, reforzar los lazos entre militares, sectores de la vieja derecha y empresarios, así como profundizar las reformas de mercado. Pero la ola democrática avanzó como en un efecto dominó hasta llegar al propio Chile e incluso a Paraguay, probablemente el país latinoamericano, junto con Haití, con más débil tradición democrática.

Esta ola de democratización no se explica como resultado de un cambio en las características económicas, institucionales, sociales y culturales de los países, sino como una salida a crisis económicas y políticas de enorme magnitud. En algunos países, como Brasil y Chile, actores políticos surgidos durante los gobiernos autoritarios iban a retener importantes espacios de decisión. En otros, como Argentina y Uruguay, el cambio en los elencos gobernantes resultó más tajante, al menos en una primera etapa. De todos modos, las sociedades

no se habían transformado demasiado. En todos los casos, sectores importantes e influyentes (incluyendo grupos de clase media y sectores populares) habían apoyado a los regímenes autoritarios: se trataba, en efecto, de sociedades muy poco democráticas. Desde un principio se notaba un cambio de preferencias, de discurso e incluso de prácticas. Existía, evidentemente, esperanza de que avanzara el proceso de democratización. Pero el éxito de la democracia no estaba en absoluto asegurado y fueron muchas las circunstancias que pusieron en duda su supervivencia y consolidación.

Si estas sociedades no habían hecho *tabula rasa* de su pasado autoritario, si la economía representaba un desafío gigantesco (no sólo en los casos crónicos de alta inflación, como Argentina y Brasil, sino también en Chile, donde las políticas económicas de los militares habían generado gravísimos niveles de pobreza, marginalidad y distribución del ingreso), ¿cómo se explica que sus procesos de democratización hayan logrado afirmarse? Un factor determinante fue el nuevo clima internacional. No es que América Latina, mucho menos el Cono Sur, se hubiera convertido en un área prioritaria para las potencias occidentales, ni mucho menos para los Estados Unidos. Tampoco cabe argumentar que la nueva estrategia de España que busca expandir la influencia de sus empresas, privadas y sobre todo públicas, en las antiguas colonias, implicara un objetivo más importante que la consolidación de su reciente perfil europeo. La relativa marginalidad de la región en su conjunto se hizo todavía más evidente en el caso norteamericano pues no había cuestiones críticas inmediatas que despertaran tanto el interés de los votantes como el de los políticos y lobistas de Washington (como la inmigración, el tráfico de drogas, el comercio y el medio ambiente). Pero el fin de la Guerra Fría permitió que el apoyo a la democratización de la región no sólo constituyera una expresión de deseos, sino que se convirtiera en un objetivo efectivo tanto de las administraciones republicanas —sobre todo la de George Bush—, como de las demócratas. Ya no había motivos para justificar lo injustificable ni para arriesgarse con dictadores poco confiables e impopulares ante la opinión pública internacional.

Las democracias del Cono Sur, entonces, se beneficiaron del nuevo clima internacional, y fueron los partidos políticos los principales protagonistas de estas exitosas experiencias. Tanto las fuerzas partidarias históricas, como las

nuevas formaciones surgidas en el contexto del proceso de democratización, fueron las responsables de guiar con bastante pericia los destinos de sociedades conflictivas y fragmentadas. No quiere esto decir que las democracias resultantes sean satisfactorias. Por el contrario, la combinación de déficits institucionales básicos (tanto en el aparato del Estado como en el funcionamiento de la política) con agudos problemas económicos y sociales constituye un desafío notablemente complicado. Pero teniendo en cuenta el pasado reciente de estos países y, sobre todo, la crisis terminal de los sistemas partidarios que experimentaron Perú, Ecuador y Venezuela —con las evidentes consecuencias en términos de su vida institucional—, es indudable que la resistencia, adaptabilidad y pragmatismo de los partidos políticos de Argentina, Chile y Uruguay contribuyeron decisivamente en la consolidación democrática.

En los tres casos, los sistemas partidarios experimentaron transformaciones y realineamientos organizativos e ideológicos. En Argentina, el predominio bipartidista del Partido Justicialista (PJ) y de la Unión Cívica Radical (UCR) se vio momentáneamente limitado con el surgimiento del Frente Grande a comienzos de los '90, que derivó en la creación del Frente para un País Solidario (Frepaso). La importancia de esta fuerza radicó en constituir una clara alternativa de oposición, aunque sin abandonar el juego democrático. Más aún, el Frepaso trajo consigo una renovación del discurso tradicional y planteó nuevas cuestiones, como la corrupción o la falta de transparencia, que la oposición (es decir, la UCR) no podía articular debido a la pobre imagen de la administración de Raúl Alfonsín (1983-1989). Luego, la conformación de la Alianza entre el Frepaso y la UCR en 1997 creó una opción de gobierno moderada y creíble, lo cual facilitó la última prueba que debía superar la democracia argentina: la alternancia en el poder entre un presidente peronista y otro de distinto partido, pero elegido por el voto popular. Hasta entonces, los presidentes peronistas habían sido desplazados ilegítimamente del poder. De modo que el triunfo de Eduardo De la Rúa en las elecciones de octubre pasado representa un hecho histórico. Asimismo, es la primera vez que el radicalismo se une a otras fuerzas para competir en una elección presidencial. Por su parte, el peronismo había sufrido profundas transformaciones que fueron determinantes para el afianzamiento de la democracia. En primer lugar, la denominada “Renovación Pero-

nista” había sentado las bases de la modernización del PJ luego de la derrota de 1983. Pero fue Carlos Menem el que modificó completamente la naturaleza del peronismo al conformar una coalición entre capitalistas y trabajadores que permitió implementar un ambicioso programa de reformas neoliberales, a pesar de los costos sociales (v.g., niveles sin precedentes de marginalidad, pobreza y desempleo). Así, se diluyó la amenaza que, desde 1955 hasta 1989, representó el peronismo para los empresarios y la clase media. Por el contrario, las encuestas indican que los principales logros de la administración Menem fueron cuestiones totalmente ajenas a la tradición peronista, como la estabilidad económica y la política exterior (v.g., el Mercosur, la solución de todos los diferendos limítrofes con Chile y el alineamiento con Estados Unidos). Por último, el PJ controla en la actualidad los principales distritos electorales, la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales, y el Senado de la Nación. Esto genera los incentivos institucionales necesarios como para descartar cualquier estrategia extrasistémica, pues el peronismo sigue teniendo un piso electoral superior al 40%, lo cual lo coloca en una inmejorable situación para pelear la presidencia en el futuro.

En Uruguay, los partidos políticos se acomodaron rápidamente a la nueva lógica de la transición democrática. Esto no debería causar sorpresa, teniendo en cuenta su relativa fortaleza y tradición para los patrones latinoamericanos. Pero a diferencia de lo que había ocurrido en la Argentina, los militares retuvieron una notable capacidad de veto, gracias a las negociaciones mantenidas con los partidos antes de alejarse del poder. Esto constituyó un límite fundamental, particularmente en cuanto a la posibilidad de investigar las violaciones a los derechos humanos. A pesar de ello, la vida institucional uruguaya transcurrió sin demasiados sobresaltos. La alternancia en el poder del Partido Colorado y el Partido Nacional, así como las fórmulas de convivencia y cooperación entre ambas fuerzas, no hizo sino confirmar las prácticas históricamente arraigadas en la política uruguaya. Es cierto que este compromiso dejó de lado la implementación de reformas económicas audaces que impulsaran la modernización y el crecimiento. En este sentido, Uruguay constituye un caso de excepción en la región por su moderación y autonomía para definir los rumbos de la política económica. Por una parte, esto se explica por el hecho de que la cri-

sis nunca alcanzó la gravedad de la de Argentina, Brasil, Bolivia o Perú, sobre todo en los aspectos financieros y fiscales. En realidad, gracias a su sistema financiero más confiable, Uruguay siempre se vio beneficiada por la inestabilidad económica de los dos primeros. Por otra parte, los partidos políticos uruguayos fueron los creadores y principales beneficiarios del aparato del Estado. Las políticas de reformas económicas hubieran tenido un impacto evidente en esa arraigada relación. Más aún, era plausible que el principal beneficiario de las mismas, al menos en términos político-electorales, hubieran sido las fuerzas de izquierda que no paraban de crecer desde comienzos de la década de 1970, a pesar del interregno autoritario. La izquierda uruguaya representa, sin dudas, un caso atípico en América Latina: logró constituirse como una clara opción de gobierno gracias a la conjunción de grupos tan diversos como poco “aggiornados”. No hicieron falta grandes renunciamentos ideológicos rimbombantes ni demasiado maquillaje para que Tabaré Vázquez, candidato del Encuentro Popular-Frente Amplio, arañara en 1999 nada menos que la presidencia. Su triunfo en la primera vuelta empujó a los blancos a apoyar al candidato colorado, Jorge Battle. Pero Uruguay queda, como la Argentina, en una situación de equilibrio institucional hasta ahora desconocida.

Lo mismo ocurre en Chile. Luego de una década de retorno a la democracia, el espectro político sigue dividido en mitades. Pareciera que desde el plebiscito de 1988, que sepultó las ambiciones continuistas de Pinochet, hasta las elecciones de diciembre y enero pasados, la política chilena hubiera estado congelada. Pero no es así. Detrás de ese aparente balance de poder se encuentra un país democratizado, con una clase política experimentada y consciente de las limitaciones y oportunidades que permite el particular diseño institucional heredado de la dictadura. La Concertación, integrada por demócratas cristianos y socialistas, comenzó con Patricio Aylwin demostrando destreza para administrar la transición, pero fue perdiendo ímpetu e imaginación, sobre todo en la segunda mitad del mandato de Frei. Con una economía comparativamente extraordinaria en términos de crecimiento y dinamismo exportador, Chile no encontró la manera de mejorar la distribución del ingreso, a pesar de implementar políticas sociales agresivas contra la pobreza extrema. Pero los sindicatos carecen de recursos para la negociación colectiva y las ONGs no tie-

nen capacidad de coordinación y selección de demandas. Por eso, el electorado se cansó de la Concertación, fundamentalmente durante los dos últimos años de recesión económica. El respeto tan mentado por el “modelo económico” y el fortalecimiento de la economía de mercado implicó, entre otras cosas, la consagración del papel primordial de los empresarios, a la sazón: los principales promotores de los partidos de derecha y defensores del régimen militar.

La sociedad chilena está ahora más dividida que nunca, pero ciertamente se ha “despinochetizado”. El gobierno de la Concertación se entregó con determinación a la defensa del ex dictador por cuestiones de soberanía nacional y, en especial, de conveniencia política. Chile sustentó el argumento de la extraterritorialidad (es decir, la ilegitimidad del procedimiento de la justicia española) y, paralelamente, buscó una solución de compromiso con los gobiernos de Blair y Aznar. Pero, al mismo tiempo, el gobierno de la Concertación enfrentó con éxito la prueba final para ratificar tanto su prudencia como el respeto por los acuerdos alcanzados hacia el final de la dictadura. Por su parte, las fuerzas de derecha se encontraron en una situación tan inesperada como provechosa. Pudieron criticar la aparente ineficacia del gobierno en lograr el retorno del ahora frágil y desdibujado militar (resultado menos de una estrategia deliberada que de los tiempos de la diplomacia y los procesos judiciales británicos). Pero, al mismo tiempo, se distanciaron prudentemente de su figura. En verdad, la notable fortaleza de su candidato presidencial, Joaquín Lavín, no fue ciertamente fruto de un parricidio descarado, sino del mercadeo político y de la polarización electoral. Sin embargo, esto reafirma que el pragmatismo y la moderación, dos componentes fundamentales para el éxito de la democracia, terminaron imponiéndose en todo el espectro político chileno, y no solamente en las fuerzas que integran la Concertación.

LA HORA DE LA POLÍTICA Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES

Haber logrado consolidar las democracias del Cono Sur representa un logro de suma importancia. Considérese la magnitud de algunos de sus subproductos como el Mercosur —a pesar de sus crónicos tropezones— y las novedosas experiencias de cooperación y asistencia entre las fuerzas armadas (ahora con fi-

nes pacíficos y hasta humanitarios, al contrario de lo que ocurrió con el Plan Cóndor en los 70). Pero las asignaturas pendientes representan, no obstante, desafíos inmensos. Muchos observadores señalan, correctamente, que se trata de democracias “degradadas”, de “baja intensidad”, incapaces todavía de asegurar la separación de poderes y el imperio de la ley. Hay también pendientes, problemas económicos y tensiones sociales que, de no resolverse al menos parcialmente, pueden provocar conflictos violentos e inestabilidad. Estas cuestiones deben encararse con decisión, coraje y mucha habilidad para promover compromisos políticos y sociales.

Las democracias del Cono Sur necesitan reformar sus instituciones de manera inteligente y consensuada para mejorar la calidad de las políticas públicas y cerrar la brecha entre ciudadanos y el Estado. Esto requiere ir mucho más allá de las denominadas “reformas de segunda generación”. De lo que se trata es de recrear el sentido de la democracia y hacer pleno uso de la capacidad transformadora de la política. Se trata, también, de encontrar un papel rector pero bien delimitado para el Estado. Finalmente, resulta imprescindible alentar a las fuerzas del mercado que generen riqueza, multipliquen el impacto productivo de la creatividad y sean ejemplo de responsabilidad fiscal y compromiso social.

Sin embargo, teniendo en cuenta los logros alcanzados y la ausencia de amenazas de desestabilización externa e interna, Argentina, Chile y Uruguay tienen ahora una oportunidad histórica para avanzar en la senda del desarrollo equitativo y sustentable. Deben mejorar nada menos que la eficacia de la democracia y de las instituciones del Estado, la distribución del ingreso y la calidad de vida de todos sus ciudadanos, sobre todos los más pobres. Aunque parezca mentira, si se advierte la naturaleza de los desafíos que enfrentan los demás países de la región, se trata evidentemente de una situación privilegiada. 